



LA RAZÓN HISTÓRICA

Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas

ISSN 1989-2659

Número 61, Año 2024, páginas 71-79

www.revistalarazonhistorica.com

NACIONALISMO PERIFÉRICO Y CRISIS DE MODELO DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA (2008-2024)

Francisco Martínez Hoyos

Doctor en Historia (España)

En los últimos años, en los que España ha sufrido una profunda crisis, tanto económica como del modelo territorial surgido de la constitución de 1978. Vayamos con la primera de estas cuestiones. Entre 2007 y 2008, una formidable crisis financiera sacudió a todo el mundo tras el estallido de la Burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. El gobierno socialista reaccionó tarde y mal ante lo que se le venía encima, desechando todos los datos preocupantes como “una falacia, puro catastrofismo. Aunque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero alardeaba, ante un grupo de inversores, de que España tenía el sistema financiero más sólido del mundo, la realidad era muy diferente. Así, mientras el desempleo crecía incontenible, el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, se resistía a actuar.

La crisis se tradujo en un recorte de derechos sociales y en un malestar que favoreció el crecimiento disparado del independentismo en Cataluña. Puede suponerse que el nacionalismo de esta comunidad era autonomista y que desde entonces ha experimentado una profunda mutación, pero... Existen poderosas razones para creer que Jordi Pujol, a partir de la distinción clásica entre programa mínimo y programa máximo, trabajó desde el principio para construir un estado catalán con la vista puesta en el largo plazo. En una carta de 1968, explica que es preciso actuar sin perder nunca de vista el horizonte: “tot objectiu immediat ha de ser precisat pensant en la meta final”. Y esa meta no era otra que la independencia. Solo que, como el Prat

de la Riba que decía ser separatista pero solo en el terreno filosófico, el líder convergente distinguía entre lo que resultaba deseable y lo que resultaba posible en un momento histórico dado.

La clave de esta política consistía en que, aunque Cataluña no era independiente, había que actuar como si lo fuera. Por eso, Pujol viaja por todo el mundo como el líder de un pequeño estado y no el líder de una importante comunidad autónoma española. Sabe que ningún proyecto político que aspire a cambiar las cosas puede rehuir la cuestión del poder: por eso intenta ocupar cuantas más parcelas de influencia con vistas a materializar su proyecto de país. Cree que este comportamiento pragmático, a la larga, rendirá más frutos que una apuesta utópica que tal vez sea hermosa pero acabará resultando estéril. Lo suyo, pues, es una defensa de la ética de la responsabilidad frente a la ética de los principios. Viene a decir que los catalanes deben dejar de soñar y plantear su combate desde la *realpolitik*: “Quan la classe política d’un país practica durant anys l’utopisme, podem afirmar que aquest país fallarà políticament”.

Mientras tanto, al igual que la derecha estatal se consideraba la única dueña de España, la derecha catalana se comportaba de la misma forma respecto a Cataluña. Ellos, los convergentes, eran sus verdaderos amos. Se aplica así que la esposa del president, Marta Ferrusola, se sintiera agraviada por la llegada de la izquierda al Palacio de la Generalitat. Eso equivalía, según sus expresivas palabras, a sufrir un robo en su propia casa. Expresaba así un concepto patrimonial que también observamos en el Pas Vasco, donde el PNV se consideraba el único dueño de la Autonomía, hasta el punto de vivir como un trauma un hecho normal en democracia, la alternancia política que convirtió en lehendakari al socialista Patxi López.

En 1990, un documento secreto, conocido como Programa 2000, expresó la voluntad del president para aplicar una política nacionalizadora, destinada a convertir la identidad catalana en hegemónica en los ámbitos político, cultural, educativo, mediático... La idea era desarrollar un proceso que se veía largo pero irreversible, con la vista puesta en el fortalecimiento del “hecho diferencial”. Se buscaba potenciar el orgullo de ser catalán, con especial atención a aquellos colectivos a los que se definía como desnacionalizados, es decir, la gente de las zonas industrializadas y periféricas, sectores empresariales, funcionarios del Estado o catalanes como los del extremo sur del Principado, con particularismos “poco integradores”. No se utilizaba la palabra “independencia”, en el sentido de proponer una separación de España, pero sí de ejercer “una plena capacidad de proyección independiente”. ¿Qué significaba la plenitud de la construcción nacional que se colocaba en el horizonte? A la vista de hechos posteriores, hay poca duda de que el objetivo final no era otro que la construcción de un nuevo estado, por más que no existieran unos plazos concretos.

Con todo, el independentismo se mantuvo minoritario hasta que el sistema territorial surgido de la Constitución de 1978 empezó a descomponerse a marchas forzadas. Las cifras son, en este sentido, muy elocuentes. Si en 1999 su techo electoral solo llegaba hasta el 9%, en 2010 el secesionismo ya había alcanzado el 20 %, porcentaje que se había convertido en un 45 % apenas cuatro años después, pero que ocultaba diferencias apreciables en función de la clase social. La secesión contaba con un apoyo muy superior entre los catalanes de rentas más altas: un 55 % de los que percibían un salario de entre 2.500 y 4.000 euros. Como bien dijo Roberto Fernández, la revuelta catalana “no es obviamente una insurrección de los pobres ni de los excluidos, sino más bien de una mayoría de catalanoparlantes de clase media a los que se han unido algunos escasos castellanoparlantes, también acomodados y más bien cercanos a los centros de poder institucional”.

La crisis se desató cuando en Cataluña se aprobó un nuevo estatuto de Autonomía, aunque con una baja participación popular en el referéndum. Maragall, al impulsar el proyecto, parecía querer igualarse con Pujol como padre de la patria. ¿No habían dicho los convergentes que los socialistas eran malos catalanes? Ahora se demostraría todo lo contrario. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló 14 de los 223 artículos y el preámbulo, en que se definía Cataluña como una nación. Una amplia movilización popular respondió a la sentencia bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos”. ¿Politización de la Justicia, tal muchos creían? El hecho es que Pasqual Maragall había declarado que el nuevo Estatuto no iba a estar limitado por la Carta Magna. Como apunta el historiador Jordi Canal, incluso él reconocía que la inconstitucionalidad de algunos apartados resultaba evidente.

Los independentistas trataron de aprovechar la debilidad del Estado para alcanzar la secesión, proyecto que no estaba legitimado por una mayoría rupturista por más que los partidarios de romper con el Estado hubieran crecido con rapidez. Se habló entonces de un supuesto conflicto secular entre Cataluña y España. Los españoles, de creer el relato victimista, no sentían por los catalanes sino odio. Los que así hablaban, sin el menor asomo de autocrítica, nada decían de la hispanofobia brutal y racista de los independentistas más exaltados, caso del columnista Salvador Sostres, autor, de un artículo en el que identificaba lo español con lo casposo y lo pobre, con un clasismo, cuando menos, escandaloso: “A Barcelona fa molt horterera parlar espanyol, jo només el parlo amb la minyona i amb alguns empleats. És de pobres i d’horteres, d’analfabets i de gent de poc nivell parlar un idioma que fa aquest soroll tan espantós per pronunciar la jota”.

Sostres, por cierto, hablaba así en 2005, antes de pasar a las páginas de ABC y convertirse en un crítico del independentismo.

Los espíritus ecuanímenes, en cambio, huyen de los planteamientos esencialistas. Como el hispanista Benoît Pellistrandi, que señala que la crisis no responde a

ninguna fatalidad histórica ni supone “un lastre con el cual la nación española tendría que cargar como una maldición”. También se ha repetido que se enfrentaban dos nacionalismos, pero, si eso es así, no se entiende muy bien que la mayoría de los españoles, tal como apunta Pellistrandi, se desentienda de la situación en el Principado y no la considere el problema más acuciante de país, menos a finales de 2017, cuando el desafío secesionista se hallaba en todo su apogeo.

En un ambiente de creciente crispación, la Monarquía, antaño un factor de estabilidad, se enfrentaba a una profunda crisis de legitimidad derivada de la implicación del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, en un caso de corrupción, y de los repetidos errores del Juan Carlos, vinculado con una aristócrata extranjera de dudosa reputación. El monarca abdicó en su hijo Felipe y se dedicó a una vida disipada que no contribuyó al prestigio de la Corona. Crecían, mientras tanto, las voces a favor de una Tercera República, aunque sin la influencia social necesaria para forzar un cambio de régimen. Frente al relato tradicional del soberano como gran héroe de la democracia, nuevos datos ayudaban a configurar un relato más realista y prosaico. En sus diarios, José Bono, ofrecía un retrato de Juan Carlos como muchos aspectos frívolos. Como Bono no era un izquierdista radical sino un moderado que simpatizaba con el rey, su relato resultaba por eso mismo más devastador. ¿Qué pensar de un Jefe del Estado que se entromete ante el ministro de Defensa para que un general permanezca en su puesto? ¿Se ajustaba a los límites de su papel constitucional cuando expresó su disgusto ante el homenaje a dos generales republicanos, Rojo y Miaja? Tampoco quedó muy bien que se quejara, bajo el gobierno de Zapatero, de la retirada de estatuas de Franco: “Estas cosas no pasaban con Felipe González ni con Guerra”.

El ministro socialista también citaba una conversación con el periodista Luis María Anson, de principios del 2005, en el que el entonces director de *La Razón* criticaba las amistades peligrosas de Juan Carlos y profetizaba su abdicación con un notable acierto respecto al momento en que se produciría: “El Rey dentro de una década ya estará suficientemente mayor y, como solamente le gusta la caza, la vela y alguna cosa más, es probable que abdique o que se dedique a pasar de los asuntos públicos y haga como estas Navidades, que, en contra del criterio de cualquier persona sensata, se ha ido a cazar con Alberto Alcocer, un tipo que puede entrar pronto en la cárcel”.

Los desastres de la última etapa de su reinado no deberían hacer olvidar la importante contribución a la democracia de don Juan Carlos. Los hechos, sin embargo, aún están demasiado recientes para permitir valoraciones ecuanímes. No resultaba fácil de entender el penoso espectáculo de un hombre que parecía empeñado en dinamitar su propio legado ante la Historia. La crisis de la Corona se acentuó porque no existían demasiados monárquicos por cuestión de principios. La mayoría

era “juancarlista” y prefería apoyar o no la figura del monarca en función de su actuación. Eso obligaba al soberano a reinventarse constantemente, hasta que no quiso o no supo adaptarse a la demanda de transparencia de los nuevos tiempos. Atrás quedaba la sobreprotección de la prensa, acostumbrada a ocultar cualquier metedura de pata del monarca. Acostumbrado a la impunidad, Juan Carlos reaccionó torpemente en un nuevo contexto en el que los periódicos fiscalizaban sus pasos con un detalle hasta entonces prácticamente inédito.

La monarquía, de esta forma, contribuyó a la deslegitimación del “régimen” de la transición, que obedecía, sí, a las torpezas de la clase política y la crisis rampante, pero también al cambio generacional. Los más jóvenes, a diferencia de sus predecesores, ya no se sentían emocionalmente vinculados al cambio político de los años del posfranquismo. La política, para ellos, ya no era aún combate épico por las libertades sino la gestión de la normalidad. A día de hoy, más del setenta por ciento de la población está formada por nacidos a partir de 1961, es decir, por gente que no vivió en primera línea el paso de la dictadura a la democracia. En palabras del politólogo Oriol Bartomeus, “sin el reemplazo de la generación de la Transición por los hijos e hijas de la democracia muy probablemente no estaríamos hablando de una crisis del sistema político, o de la manera en que lo hacemos”.

Felipe VI tuvo que enfrentarse a la crisis catalana y llamó la atención por el mensaje institucional en el que criticaba con dureza la deslealtad de la Generalitat. Se hicieron todo tipo de comentarios y se le acusó de haber asumido la línea política del PP. Eso no era cierto: no había hablado del gobierno sino del sistema constitucional que, como jefe del Estado, tenía la obligación de defender.

Se dio el fenómeno extraño de que ciertos republicanos, desde una óptica supuestamente “no nacionalista”, apoyaran la Independencia de Cataluña para expresar su oposición al gobierno de Madrid. Finalmente, se celebró un simulacro de referéndum y el Parlamento proclamó la República. La reacción del Estado no se hizo esperar, con la suspensión de la autonomía en virtud del artículo 155 de la Constitución. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó al extranjero. ¿Rebelión? ¿Intento de golpe de Estado? Clara Ponsatí, consellera en el gobierno de Puigdemont, diría que los suyos iban “de farol”. El comentario refleja, en el mejor de los casos, frivolidad, puesto que compañeros suyos acabaron en la cárcel. Todo hace suponer que los independentistas creyeron que Madrid no iba a atreverse a contraatacar, una visión, todo hay que decirlo, bastante plausible a la luz de comportamiento irresoluto del gobierno central.

El “relato” secesionista se difundió gracias a la utilización magistral de las modernas técnicas de comunicación: había que infundir en la gente la sensación de que participaba en un combate épico. A un lado, los defensores de la libertad. Al otro, un Estado fosilizado, anclado aún en los valores y las prácticas del franquismo como

evidenciaba la represión policiaca del referéndum ilegal. Poco importaba que las imágenes más brutales correspondieran, en realidad, a otros sucesos. En Europa, fueron muchos los que compraron, por ignorancia o por interés, la versión victimista de los hechos.

Los partidarios de romper con España utilizaron, con gran astucia, eslóganes hábiles como el del “derecho a decidir”. Esta expresión, en realidad un eufemismo de “independencia”, estaba pensada para ganar el máximo apoyo social posible. Porque, como bien apunta el periodista Francesc-Marc Álvaro, ¿quién no desea poder decidir por su cuenta? Entre tanto, las calles se llenaban de forma apabullante de símbolos independentistas y las librerías de volúmenes entre los que era difícil encontrar uno contrario a la nueva ortodoxia. Las protestas se multiplicaban, convirtiendo así la política en una suerte de estética, tal como ha señalado Carlos Granés. El “proceso”, desde esta óptica, equivalía a una performance de tamaño descomunal. Era una obra de arte en sí misma. Una y otra vez, se repetía el mantra del expolio. España robaba a Cataluña. La idea, en perspectiva histórica, pertenece al tipo de propaganda que los contendientes utilizan en las disputas territoriales. Si en el siglo XVII era Castilla la que se quejaba de la insolidaridad catalana, ahora era Cataluña la que denunciaba la voracidad de Castilla. Los políticos nacionalistas olvidaban, muy convenientemente, que era España la que sacaba de apuros financieros a una Generalitat endeudada, a la que el Fondo de Liquidez Autonómica entregó miles de millones. Uno no puede imaginar, ciertamente, que Simón Bolívar pidiera dinero a Fernando VII.

Según los partidarios de la equidistancia, todo se reducía a un conflicto entre dos nacionalismos, el catalán y el español. Pero... ¿En qué medida puede hablarse de nacionalismo español cuando mucha gente rechaza el término “España” por sus presuntas connotaciones franquistas? Las encuestas han detectado como, en los últimos años, se ha producido un descenso de más de quince puntos en la diferencia que separa a los que se sienten muy orgullosos de ser españoles de los que lo están poco o nada. Cuando se pregunta a la gente por las causas que merecen que uno arriesgue la vida, la patria solo está en un quinto lugar: “Este resultado nos sitúa (...) en los niveles más bajos de los países democráticos junto con japoneses y alemanes, en claro contraste con los países anglosajones y con el resto de Europa occidental”.

Incluso una dirigente del gobierno, Carmen Calvo, a propósito de la devolución a Cataluña de los papeles de la guerra civil custodiados en Salamanca, indicó que consideraba apropiado hablar de archivos “estatales”, no de archivos “nacionales”. ¿Es este el nacionalismo supuestamente exacerbado? Los auténticos nacionalistas, no importa la definición que se adopte, se dedican siempre a exaltar sin medida la nación, no a esconderla bajo la mesa como algo incómodo y vergonzante. Una nacionalista que no siente la necesidad de manifestar sus convicciones en público es una contradicción en sí misma. Y, sin embargo, esta era la actitud de Jordi Sevilla,

ministro de Administraciones Públicas, cuando aseguraba que él también sentía patriota pero no veía la necesidad de proclamarlo.

Por supuesto, resultaba impensable que un nacionalista catalán, o vasco, se expresara en parecidos términos, como si el patriotismo fuera una cuestión meramente privada. Ellos, por el contrario, se dedicaban a exaltar un pueblo supuestamente único, como si la realidad sociológica no mostrara una pluralidad de identidades. Si hay dos territorios que sean, dentro de la península, auténticamente plurinacionales, esos son Cataluña y Euskadi. Otra cosa es sus ordenamientos autonómicos se obstinen en no reconocer esa diversidad, al tiempo que se niega a España cualquier tipo de personalidad. De ahí que su nombre se sustituya por el eufemismo de “Estado español”.

En cuanto al idioma, aunque es cierto que todo el mundo habla el que quiere, parece claro que castellano, a ojos nacionalistas, forma parte de un universo ajeno. El hecho de que un catalán lo utilizara resultaba, para determinadas sensibilidades, un contrasentido. Según Xavier Bru de Sala, el que fuera director general de Promoción Cultural de la Generalitat, estaba claro que la producción cultural en castellano no podía ser considerada parte de la cultura catalana. Se trataba, a su juicio, del producto de “una anormalidad”. El propio Jordi Pujol expresó la misma idea durante el día de San Jordi de 1997, después de que el periodista Sergio Vila-Sanjuán, al reparar en que no había citado a ningún escritor en castellano, le mencionara *Una comedia ligera*, la reciente novela de Eduardo Mendoza. “No és el mateix”, respondió Pujol. El líder convergente, en efecto, podía admirar a los autores en español, pero de la misma forma que a Goethe o a Dante. Es decir, como a escritores de una tradición que él no reconocía como propia.

El escritor Juan Marsé, al recibir en 2009 el Premio Cervantes, denunció esta visión discriminatoria y abogó por la pluralidad: “Como saben ustedes, soy un catalán que escribe en lengua castellana. Yo nunca vi en ello nada anormal. Y aunque creo que la inmensa mayoría comparte mi opinión, hay sin embargo quien piensa que se trata de una anomalía, un desacuerdo entre lo que soy y represento y lo que debería haber sido y haber quizá representado”.

La versión independentista de los hechos implica, aunque no se reconozca explícitamente, una pretendida superioridad moral. Los catalanes no eran corruptos y hacían bien las cosas, todo lo contrario que los españoles. Ese mito se vio cuestionado cuando salieron a la luz las discutibles prácticas de Jordi Pujol y sus hijos, pero eso no influyó para nada en los que ya estaban convencidos de las bondades del independentismo. Pujol podía ser un mafioso, pero era “uno de los nuestros”. Eso explica que Artur Mas dijera que su antecesor se había equivocado al confesar las irregularidades. El padre de la patria merecía, según Mas, “volver a la plena normalidad”.

En realidad, pese a la sorpresa de tantos, lo del *Honorable* resultaba hasta cierto punto previsible. Un hombre de impecables credenciales catalanistas, Josep Benet, había acusado en su momento a Pujol de confundir Cataluña con sus propios negocios, tal como antes había hecho Francesc Cambó.

Después de varios años de continua tensión, ¿qué balance? El antiguo consenso en torno al catalanismo ha saltado por los aires y Cataluña se ha dividido en dos mundos paralelos con lenguajes políticos intraducibles. La dialéctica amigo-enemigo, nosotros-ellos, no hace presagiar, al menos a corto plazo, un futuro demasiado esperanzador, aunque ahora ya no estemos en lo peor y más angustioso de la crisis. Seguramente Francesc-Marc Álvaro tiene razón cuando interpreta lo sucedido como un cruce de ignorancias: la del gobierno de Madrid, incapaz de entender el nuevo independentismo, temerariamente seguro de que todo se reducía a un suflé que bajaría de la misma forma que había subido, y la de los independentistas, que se habrían lanzado a vencer a su enemigo sin tener ni idea de lo que tenían delante, víctimas de un peligroso exceso de confianza: “Los tres máximos responsables políticos del proceso desde las instituciones eran legos absolutamente sobre las interioridades del poder de Madrid. Ni el president Carles Puigdemont, ni el vicepresidente Oriol Junqueras, ni la presidenta del Parlament Carme Forcadell tenían experiencia en la capital de España”.

El gobierno de coalición entre PSOE y Podemos evolucionó más o menos a trancas y barrancas, entre las discordias entre ambos socios. Podemos ocupó responsabilidades de poder mientras un sector del partido continuaba el discurso demagógico en torno a lo que denominaban “régimen del 78”. No se entendía muy bien cómo podía ser el sistema tan antidemocrático y, a la vez, tener en altos cargos a dos izquierdistas como Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El cuestionamiento del sistema se hacía en nombre de un discurso que contraponía a la clase política corrupta, la denominada “casta”, y el pueblo doliente. Se legitimaba así un discurso antipolítico que, aunque pareciera de raíz progresista, no se diferenciaba tanto del populismo de derechas de, por ejemplo, un Miguel Primo de Rivera, dirigente que se también había presentado como ajeno a la elite dirigente para acabar con los turbios manejos de la clase dirigente. Mucho antes que Podemos, la Unión Patriótica primorriverista ya se había definido como un partido “antipartido”. Y también se había distinguido por el culto a la personalidad. Si Primo se presentaba como el salvador España, Iglesia era, a decir de su colega Pablo Echenique, “una alineación planetaria: suma erudición política, capacidad comunicativa, estrategia histórica...”.

Hasta la fecha, lo que ha predominado, a izquierda y a derecha, ha sido la demonización del contrario a partir de un alto grado de violencia simbólica. Este, sin embargo, no es un problema exclusivo de la clase dirigente hispana. En todo el mundo, de la mano de la extensión inaudita de las redes sociales, se fomenta una exigencia de puritanismo traducida en el linchamiento a todos aquellos no se ajustan

a un supuesto deber moral. Así, los independentistas han criticado a Rosalía, la nueva superestrella española, porque no canta en catalán ni hace propaganda en favor de los “presos políticos”. Esta lógica excluyente, cuando se lleva al extremo, anula la pertenencia a la comunidad de los que no se ajustan a determinados parámetros. Así, aquel que, por ejemplo, no es independentista, pierde por eso mismo la condición de catalán y se convierte, como dijo Joan Tardà, de ERC, en un traidor “a la tierra”.

El “procés” parece haber perdido, hoy por hoy, gran parte de su empuje en medio de las divisiones internas entre el radicalismo de Junts per Catalunya i la moderación de Esquerra Republicana. Dentro del campo independentista, las voces autocríticas han señalado deficiencias como la falta de realismo de los líderes, que les habría conducido a minusvalorar los obstáculos que podían encontrarse por el camino. Así, al mismo tiempo que se hacían afirmaciones voluntaristas sobre el futuro, nadie especificaba de qué manera iban a alcanzarse los objetivos señalados. Se hablaba de desobediencia generalizada, pero se pasaban por alto realidades molestas, como la débil implantación del secesionismo en el mundo obrero y sindical. Así, mientras determinados independentistas proclamaban que Cataluña es “un solo pueblo”, se dedicaban a tratar con paternalismo a los que no compartían su proyecto político, a los que se dirigían como si fueran paganos necesitados de evangelización. Su ideología esencialista repelía, en ocasiones, a otros partidarios de la autodeterminación. Todo ello configuraba un escenario en el que el futuro aparecía incierto, en contraste con las promesas mesiánicas. De ahí que pudiera decirse que el independentismo era, a la vez, “un gigante emocional y un enano político”.

A nadie se le ocurría pensar, mientras tanto, que ese “pueblo” pudiera ser una entelequia, una construcción ideológica que permite a otros hablar en su nombre en función de unos intereses políticos concretos. El nacionalismo catalán, en suma, era puro populismo: “El pueblo no existe en sí mismo sino a través de los relatos que nos lo describen”, señala, en un atinado estudio, José María Perceval.